

propuestas para un proyecto argentino



Publicación del Instituto para el Modelo Argentino Nº 7
Basavilbaso 1378, 3º "H" - (54 11) 4328 3923 - www.sitioima.com.ar - correo@sitioima.com.ar

UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA ES LA BASE DE LA SEGURIDAD

La represión es la exteriorización del fracaso estatal en la integración y socialización ciudadana. La peor sanción jamás repara la pérdida y el dolor de la víctima. Y para el piquete no hay mejor respuesta que el trabajo fecundo y realizador.

POR JOSÉ LUIS DI LORENZO
jdilorenzo@sitioima.com.ar



En la Argentina, al igual que en toda América latina, la creciente inseguridad ciudadana admite como causa-efecto el modelo globalizador y sus valores. Poseer es el signo de la realización personal y el medio indispensable para lograr la "felicidad del confort". La publicidad exacerba el consumo –incluso de lo que no se necesita– y la concentración económica sigue generando exclusión, con su componente de desempleo e inequitativa distribución de la riqueza, que impide cada vez a más gente acceder a lo indispensable para vivir. Concentración, exclusión y publicidad consumista conformaron un maquiavélico motor que sentó las bases de una profunda desintegración moral, sustento de la inseguridad ciudadana.

Hoy parece volver a privilegiarse como nociva la respuesta de los trabajadores sin trabajo, presentándola como un fenómeno al que se liga con la inseguridad a partir de un sesgo antojadizo. En no pocas ocasiones también se lo utiliza para responsabilizar al Gobierno como si se desentendiera del problema, declinando poner mano dura, lo que fue abonado insensatamente por un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. No se puede dudar de que la única respuesta definitiva al fenómeno piquetero, que tanto parece alterar los ánimos de algunos, es dar trabajo, reconociendo que es allí donde el tejido social podrá ser reconstruido.

Un estudio del Instituto de Investigaciones de la Fundación Mediterránea –insospechado de posturas progresistas– revela que "el uno por ciento de aumento de la tasa de desempleo produce un 0,39 por ciento de aumento en la tasa de delitos, en tanto un uno por ciento de aumento del PBI per cápita produce una disminución del 0,75 por ciento de la criminalidad". Datos que nos permiten encontrar puntos de coincidencia entre la óptica productiva y la sociológica, que- >>>

Este ejemplar acompaña la edición de Página/12 del 5 de julio de 2004

HAY QUE IDENTIFICAR LAS RAÍCES COMUNES DE LA VIOLENCIA

El sistema estatal de represión del delito es en sí mismo un mecanismo de prevención cuando su funcionamiento es eficaz.

POR MARÍA DEL CARMEN FALBO *

En el proceso de democratización de América latina, las fallas en las políticas tendientes a consolidar la seguridad urbana constituyen uno de los factores de mayor desestabilización que perturban el normal desarrollo de tal evolución. El fracaso de las instituciones públicas y del Estado en general en la lucha contra la creciente criminalidad instala en la sociedad la percepción de que toda la estructura oficial tradicional que configura al sistema penal está desbordada por el fenómeno del delito y no encuentra el cauce de acción efectiva.

El continuo incremento del delito violento genera en la comunidad un sentimiento de agobio, angustia, miedo y desprotección. Y al mismo tiempo, anida un estado de ánimo colectivo inclinado a promover toda medida represiva que signifique un agravamiento o endurecimiento de las acciones punitivas respecto de quienes delinquen. Muchas veces, este sentimiento de "vindicta pública" es captado especulativamente por los medios masivos de difusión, que receptan y retransmiten el mensaje implantando en la comunidad la convicción de que tales abordajes conducen a una solución definitiva.

Y existe el peligro real de que se genere un círculo vicioso, en el que el fracaso de los gobiernos para enfrentar decididamente al delito sea visto como debilidad del Estado y la sobrerreacción de éste con medidas represivas, con poco impacto real, contribuya a erosionar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.

Los modelos económicos adscriptos al neoliberalismo de la globalización, con las inevitables secuelas de pobreza, desempleo, exclusión y marginación social, se han constituido en verdaderos promotores de la delincuencia urbana, sin que tal afirmación implique identificar pobreza con delito, ni adherir a la postura de quienes entienden que tal panorama socioeconómico constituye un justificante que elimina la responsabilidad individual de quien opta por delinquir.

El problema de la deuda es mencionado como un factor determinante de este progresivo deterioro de las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos, así como también de la creciente concentración económica, dando lugar de tal forma a las condiciones propicias para el mantenimiento de la tensión social y su manifestación violenta.

La mayor parte de la literatura especializada sobre el tema en nuestra región coincide en reconocer la multicausalidad de la criminalidad y su determinación preponderante por los factores propios del subdesarrollo. Del análisis de la obra de Carlos Elbert, *Criminología Latinoamericana* puede concluirse en que hay una vinculación muy fuerte entre el aumento de la conflictividad social, la violencia, y el proceso de decadencia y empobrecimiento paulatino que afecta a nuestros países. Es indudable que el aumento de la criminalidad urbana responde a factores económicos, sociales y culturales que conforman una trama compleja de circunstancias condicionantes.

Históricamente, el Estado ha tenido el monopolio de la fuerza para el mantenimiento del orden público, y a él ha correspondido siempre efectivizar la sanción de las conductas transgresoras, ejerciendo con exclusión de todo otro actor social la facultad punitiva que a la vez es su deber. Atendiendo a esta trascendental misión, se reconoce la legitimación del sistema penal estatal como instrumento esencial en la lucha contra la delincuencia.

Pero la realidad imperante en nuestras sociedades pone en evidencia que las políticas criminales que sustentan la estrategia exclusivamente en la operatividad de aquel sistema penal están destinadas al fracaso a la vez que en la mayoría de los casos contribuyen al debilitamiento de principios en que se funda todo Estado de derecho.

Las respuestas que el Estado ha venido elaborando a través de este esquema tradicional de represión del delito exhiben hoy su falta de adecuación y capacidad. Y aún más, cuando se persiste en este enfoque unilateral y parcial generalmente se experimentan aquellas recetas de mayor rigor y endurecimiento que terminan por dar un nuevo impulso a la espiral sin fin de la violencia en crecimiento, afectando al mismo tiempo en forma sistemática garantías individuales, en franca contradicción con nuestro sistema regional de protección de los derechos humanos.

Es necesario entonces girar el foco de atención del problema y, frente a los magros resultados de las políticas meramente represivas, que en definitiva apuntan a resolver las consecuencias o "el después" del fenómeno delictual, se impone explorar aquellas alternativas que apuntan a evitar –"el antes"– la producción del crimen mediante la remoción de los factores que le dan origen o a través de acciones tendientes a impedir situaciones propicias para su materialización.

Reconociendo entonces que en la generación de la violencia y criminalidad juega un papel determinante la situación socioeconómica y cultural es forzoso concluir que en la base de toda estrategia de prevención del delito tienen que instalarse políticas de desarrollo social como sustento integrador de la misma.

El sistema estatal de represión del delito es en sí mismo un mecanismo de prevención cuando su funcionamiento es eficaz. En esta línea de pensamiento se ubican quienes reconocen en la pena un efecto disuasivo, sea como prevención especial o general, que sin duda se materializa cuando aquélla es la resultante de mecanismos ágiles y justos de resolución del conflicto social. Las acciones que persiguen el mejoramiento de los mecanismos de represión deben encararse al mismo tiempo que se adoptan programas de prevención que tomen en cuenta las causas del delito y reduzcan los niveles de violencia social, con activa participación de la comunidad.

El éxito de emprendimientos en los que se combinan planes preventivos con medidas propias del sistema clásico de represión, depende indefectiblemente de la existencia de un consenso previo y sustentable, que involucre a todos los sectores sociales, en el que se establezcan las grandes líneas de acción en la materia y que sea asumido por los partidos políticos como una verdadera política de Estado con rumbo fijo e invariable, que debe quedar al margen de las contiendas por el poder.

El afianzamiento de la seguridad pública es una empresa particularmente dura. Las dificultades por las que recurrentemente transitan nuestras economías operan como limitaciones determinantes, al tiempo que la aparición de novedosas formas de delincuencia organizada internacional debilitan los esfuerzos unilaterales. El gran desafío consiste en identificar las raíces comunes de la violencia y sobre la base de un debate público y abierto sobre el modelo de seguridad que pretendemos encontrar los caminos que conduzcan a respuestas eficaces para cada comunidad, que tiendan a la vez a un fortalecimiento de los principios en que se funda todo Estado de derecho y la convivencia en democracia. En la construcción y mantenimiento de este marco de consenso juegan un papel destacado los medios masivos de difusión e información pública, los que en un contexto de plena libertad de expresión deben asumir responsablemente una función clarificadora y docente y dejando de lado actitudes sensacionalistas contribuir a instalar la convicción de que no existen soluciones mágicas ni instantáneas, sino programas cuyos resultados se concretan en el tiempo ■

** Presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.*

UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA ES LA BASE DE LA SEGURIDAD

POR JOSÉ LUIS DI LORENZO

>>> dando al descubierto de manera concluyente que el desempleo produce el incremento de la tasa de delitos, por lo que se debe asumir que si bien no es causa principal ni excluyente, el problema social y de pobreza contribuye de modo importante a la inseguridad, máxime en el modelo de no país importado.

Abordar el tema de la seguridad, así como la sensación que de ella se deriva, exige un tratamiento conceptual omnicomprensivo, partiendo de que el bien jurídico protegido consiste en el estado ideal de ausencia de riesgo, lo que impone analizar la problemática desde un punto de vista sistémico, atendiendo a sus amplias perspectivas políticas, jurídicas, criminológicas, psicológicas, económicas y sociales.

Seguridad y convivencia

Tomando al delito como causa de inseguridad ciudadana, el campo teórico establece la disyuntiva entre las libertades individuales y la seguridad pública, entre el endurecimiento de las penas y los abolicionismos, entre la pena-sanción como elemento de disuasión y la pena como instrumento de rehabilitación, entre privilegiar la prevención o potenciar la represión. La represión es la exteriorización del fracaso estatal en la integración y socialización ciudadana. La peor sanción jamás repara la pérdida y el dolor de la víctima. Sin embargo, no es posible quedarse en un abolicionismo que priorice solamente la respuesta a los derechos humanos de los victimarios, como tampoco se puede ni se debe legitimar un marco represivo, que pueda ser utilizado como herramienta para resolver conflictos sociales.

La norma-sanción hay que considerarla desde una visión de víctimas potenciales y como imputados, tratando de superar la simplificación comunicacional que afirma que el aumento de los derechos de los últimos supone la desprotección de los derechos de las víctimas.

No se puede obviar del análisis conceptual lo que se conoce desde hace tres décadas como las nuevas formas delictuales, retomando los trabajos pioneros de Sutherland sobre los delitos de cuello blanco. Al respecto resulta lógico preguntarse por qué los detenidos sólo representan cierto tipo de delitos cometidos y cuál es el rol de esta ejemplaridad pública respecto de la actitud individual de los ciudadanos. La seguridad es uno de los pilares básicos de la convivencia y debe ser ofrecida con equidad, sin exclusión alguna, exigiendo asumir el problema integralmente para superar los límites que pretenden circunscribirlo excluyentemente a un tema policial.

La seguridad es mucho más que un problema a ser resuelto policialmente. El hombre, naturalmente inseguro producto de la finitud de su existencia, procura afirmarse asegurando lo que posee o lo que aspira. El que tiene, pone el acento en su seguridad personal, y el que sólo atesora su capacidad de ganarse el sustento, demanda seguridad social. Ambos aspiran a un marco de paz social que les garantice la seguridad personal.

Sin embargo, la inseguridad se enfoca tradicionalmente y de manera casi excluyente desde la óptica de la represión de la criminalidad. Pero como se señala anteriormente vale la pena revisar la concepción que sobre la seguridad aportan la Economía y la Sociología, intentando integrarlas, como aporte a una política que logre modernizarse al ritmo del nuevo modelo científico emergente.

La visión económica

Los economistas sostienen que el impacto de la criminalidad es múltiple y devastador porque afecta derechos esenciales de toda sociedad, que hace a la vida, al derecho de propiedad y al bienestar de sus habitantes. Y añaden que cuando la seguridad se ve afectada corre peligro la gobernabilidad del sistema. Desde una visión estrictamente de la economía dominante, el crimen y la violencia producen pérdidas en la dotación de capital, infraestructura física, comunicaciones y también en la disponibilidad y calidad de los recursos humanos, afectando las normas de convivencia y el "ambiente de negocios", disminuyendo el flujo de inversiones y la creación de empleos. También le ocasionarían mayor gasto al Estado en policía, servicios de justicia, y detención en penitenciarias, incrementando asimismo el costo de prevención privado, todo lo que constituye una pérdida social. Se supone –acotan– que una persona comete un crimen si la utilidad esperada de éste excede la que podría lograrse usando el tiempo y otros recursos en actividades lícitas.

La visión sociológica

Desde otro ángulo, un sociólogo como el norteamericano James Petras, como conclusión de un proyecto de investigación que realizó entre 1950 y 1988 en las ciudades de Detroit, Nueva York, Boston, Chicago y Newark, señala que hay una relación perfectamente notable y, en todos los casos, cuando caen la industrialización y el empleo industrial, aumentan la delincuencia y el crimen. Si bien no cualquiera elige robar o matar por el hecho de ser pobre, sostiene que la explicación no esta solamente en la pobreza sino sobre todo en la falta de integración. Cuando el hombre está marginado por un desempleo prolongado, su autoridad de padre suele quedar lesionada, y en más de una ocasión termina abandonando a la familia y dejándola en un cuadro de desamparo y quebranto. Alerta también respecto de que "el mercado sin control político y social tiene un efecto de disolución sobre la sociedad. Trabaja sobre el egoísmo como principio filosófico de la delincuencia".

Su aporte se enriquece con lo que entresaca de las entrevistas que en su investigación mantuvo con líderes de bandas delictivas de Nueva York, ya que dice: "entre ellos, la imagen del hombre de éxito es la del especulador, el capitalista de libre mercado. Vale decir que el delincuente sería el empresario de los marginales... Estos marginales son los más conservadores y antisolidarios".

Injusticia y pobreza

La Argentina apenas ha ascendido dos escalones del Infierno, según afirma el presidente Néstor Kirchner. La pobreza aún afecta al 47,8 por ciento de la población (17,7 millones de personas), mientras el 30 por ciento de los ciudadanos afronta problemas de empleo y el ingreso promedio del 65 por ciento de las familias en el país es apenas de 551 pesos mensuales, bastante menos que el costo de una canasta básica familiar de alimentos y servicios. Las jubilaciones promedian los 350 pesos y los planes sociales son de 150 pesos, muy inferiores al costo de una canasta familiar de indigencia.

Sin embargo, a un año del actual Gobierno, este desolador panorama se contrasta con el superávit fiscal primario (ingresos menos gastos) logrado para el primer trimestre del año del orden de los 4300 millones de pesos que, según estimaciones, ascenderá a 15.000 millones de pesos en los meses restantes, aunque los concentradores pujan por afectarlo a un fondo anticíclico o a honrar aún más la deuda externa.

Frente a una epidemia todos coincidiríamos que el Estado debe vacunar, caso contrario ni siquiera el que tenga acceso a la mejor medicina privada queda a salvo del riesgo de enfermar y morir. La Argentina padece una epidemia de injusticia y pobreza, por lo que la inversión social constituye la terapéutica que no puede esperar. El superávit fiscal debe constituir el pilar de reconstrucción de la seguridad en sentido amplio que hemos perdido. Sabemos que la concentración económica aún conserva su buena salud y son sus voceros y lobbystas los que se oponen tenazmente al mínimo cambio distributivo, sin embargo es hora de que desciendan algún escalón del paraíso en que sigue viviendo.

La seguridad reclamada y deseada es un fenomenal escenario para discutir el modelo de sociedad al que aspiramos. Muchas veces hablamos de ética, reclamando la instrumentación transparente de los actos de Gobierno y si bien es necesario hacerlo no es excluyente. Hay otra ética, de estadio superior, que es la conceptual, por la que se definen los derechos y obligaciones que como sociedad jurídicamente organizada otorgamos a todos y a cada uno. Mientras la deificación de lo material ha venido justificando todo, estamos frente a la oportunidad de revalorizar a la persona como sujeto y fin de las mejores políticas del Estado, equilibrando los medios para una sociedad más justa, tarea superadora de la limitada concepción, interés u oportunismo sectorial o partidario.

No se trata de satisfacer las visiones de unos u otros, sino simplemente de concretar algo tan declamado y no siempre logrado: el bien común, el de todos los argentinos. La Argentina puede, todo depende de nuestra decisión y respaldo ciudadano ■



¿QUÉ?... LA INSEGURIDAD

Se trata de volver a ser una Nación integrada y con justicia social, para enterrar esta inseguridad definitivamente en el pasado.

POR JUAN ESCOBAR
jescobar@sitioima.com.ar

Hablamos de la inseguridad. Es un tema recurrente para los argentinos y podemos encontrarlo con mayor frecuencia de lo deseable en los "panoramas internacionales".

Discutimos acerca de la inseguridad, con una propensión bastante marcada a no ponernos de acuerdo. Elaboramos teorías acerca de la inseguridad. Que es una sensación. Que parte de una interpretación de los hechos, y por lo tanto es una construcción. Que es un discurso alimentado y promovido por los medios.

Pero los hechos nos responden y ninguna interpretación es más inteligente que ellos. Y los medios de comunicación nos devuelven esa imagen de lo que somos, esa imagen de lo que nos pasa, multiplicada al infinito. Como la cachetada que le da el maestro Zen cuando el discípulo comienza a hacer disquisiciones demasiado sutiles: para que no pierda conciencia de la realidad concreta. Y de nuevo hablamos de la inseguridad, teorizamos y discutimos hasta la llegada inexorable del siguiente golpe.

Cada vez que recrudece el problema de la inseguridad, esto intenta ser aprovechado por quienes pretenden apagar el fuego tirándole nafta y piden represión y un mayor endurecimiento por parte del Estado.

De esta manera, se valen del orden del discurso para canalizar el remanido discurso del orden, en una lógica irresponsable que consiste en redoblar la apuesta sin detenerse a pensar lo que está en juego.

La "solución final" que los apóstoles de la mano dura intentan promover, difícilmente pueda generar otra cosa que una espiral de violencia mayor que puede alejarnos definitivamente de la pacificación que necesita el país. Es que la inseguridad que hoy vivimos es uno de los efectos residuales de la devastación llevada a cabo a lo largo del último cuarto del siglo XX.

Si a partir del 24 de marzo de 1976 se instaló en la Argentina un modelo de no-país, no debería sorprendernos que nos dejara como resultado una serie de negaciones, entre ellas la inseguridad, la inequidad, la intolerancia, la incertidumbre, la insatisfacción, la inestabilidad, la insustentabilidad, la insolvencia, la injusticia. Que haya sembrado la desindustrialización y el desempleo, la desesperación y la desesperanza, el desasosiego, la desdicha, el desconcierto, entre otras cosas. Que haya dejado a millones de argentinos sin salud, sin educación, sin techo, sin pan y sin trabajo.

Así, como en las capas de una cebolla, se fueron superponiendo cantidad de inseguridades. La de los que trabajan hoy y mañana no saben. La de los que comen hoy y mañana no saben. La de los que ni trabajan y casi no comen y no saben si se van a despertar al día siguiente. La de los que viven en la calle. La de los que no quieren salir a la calle porque no saben si vuelven. La de los que no están seguros ni siquiera en sus casas y la de quienes tienen que poner sus propiedades como fuente de recursos a cambio de que se los devuelva –o no– a la vida.

Ya el viejo Maslow hablaba de la seguridad en el marco de su pirámide de las necesidades. Una necesidad, eso que se hace notar cuando falta. Yposiblemente se trate de eso. De necesidades. De una serie de necesidades que no tienen atención. De necesidades acuciantes que empujan a la marginalidad a una considerable parte de la población. Que sólo pueden atenderse en el mercado, porque ese es el mecanismo establecido y no existe prácticamente otro. Salvo lo siempre insuficiente que se puede hacer desde los restos de un Estado endeudado y destruido por una acción sistemática y sostenida.

O bien que se atienden en esquemas donde la única obligación es moral. Respondiendo al deber ser, a valores como la solidaridad, la buena voluntad y la iniciativa social, que no tienen precio de mercado. Necesidades diversas que son contenidas en parte por organizaciones que nacen de la sociedad sin que el objetivo sea el lucro. Organizaciones con rostro humano que no hacen más que proyectar la voluntad de ayudar de las personas que las integran. Una malla de contención que amortiguó el derrumbe, pero que se ve desbordada a pesar de lo mucho que se hace.

Si la inseguridad del presente es la consecuencia lógica de los acontecimientos de nuestra historia reciente, si es parte del país que nos dejaron, es porque la paz social y la seguridad que nos están haciendo falta son parte del país que alguna vez tuvimos.

Es algo que también perdimos, pero que no podremos recuperar volviendo al pasado, sino atacando las causas de los males que sufrimos y generando las condiciones para el futuro que deseamos, al que es preciso imaginar, proyectar y construir para que vaya siendo una realidad cada vez más palpable.

El común denominador de la inseguridad es la ausencia total de garantías, la aleatoriedad, el azar determinando la vida o la muerte de manera imprevisible. Pero además es miedo, incertidumbre, pánico, paranoia, indignación, impotencia, parálisis. Arturo Jauretche decía que no teníamos que dejarnos arrebatar la alegría, porque un pueblo triste no puede construir nada, podríamos comenzar entonces por reconocer que desde la inseguridad, en cualquiera de sus acepciones, no se puede luchar contra ella. Tenemos que hacernos fuertes como sociedad concentrándonos en las cosas que nos juegan a favor. En las cosas que nos unen y en la acción de quienes practican la solidaridad, la cooperación, el compromiso con el bien común y la pertenencia a una comunidad nacional con vocación de construir un destino de dignidad y autodeterminación.

Porque posiblemente el I Ching, ese oráculo chino que pretende sistematizar el azar, tenga algo de razón cuando dice que la mejor forma de luchar contra el mal es una decidida acción a favor del bien.

O, más cerca nuestro, Alfredo Casero cuando afirmaba: "Dicen que no nos queda nada. Yo no lo creo. Todavía nos quedamos nosotros". Y es un recurso en gran medida inexplorado al que deberíamos prestar más atención. Nosotros, como conjunto de personas que comparten algo más que un territorio. Nosotros y las cosas que podemos hacer colectivamente con las multitudes que somos, para volver a ser una Nación integrada y con justicia social. Para enterrar esta inseguridad definitivamente en el pasado.

El problema de cada día es cómo sobrevivir en un país cada vez más inseguro. La solución, necesariamente, deberá partir de plantearnos la forma de construir un país nuevo, más seguro. Sobre las ruinas de lo que fuimos, edificar entre todos lo que queremos ser. Para la Argentina de hoy, un Proyecto Nacional significa eso, lo que nos proponemos hacer con lo que han hecho de nosotros ■



ECONOMÍA POLÍTICA DE LA INSEGURIDAD

El presente escrito no es más que una reflexión sobre los últimos acontecimientos, a la luz de "la economía política de la inseguridad".

POR ERIC CALCAGNO

En los tiempos felices en los que la economía no había adquirido aún el fetichismo por los juegos matemáticos, que de simple y riguroso instrumento devinieron en el objeto mismo de estudio, no existía la economía a secas, como ahora, por cierto soberbia, aunque incompleta e incomprensible. En efecto, la economía era política. Esto significa que ninguna teoría, doctrina o propuesta económica llevaba de manera explícita una determinada visión del ser humano, de sus actos en la producción de riqueza y de su destino.

Así lo veía Adam Smith, el padre fundador tan citado como poco leído, a la búsqueda de las leyes que debían explicar un mundo cuyos reyes y papas no marcaban más los límites del conocimiento; así lo entendió David Ricardo y su patriótica defensa (para Inglaterra) del beneficio empresario contra los terratenientes rentistas; de esto escribía Stuart Mil cuando señalaba que si bien podía existir una mejor manera de producir, desde los aspectos técnicos, no había nada determinado a priori en cuanto a la distribución de los frutos de la producción, que dependen de decisiones sociales.

También de ese modo lo comprende quien asome a las tribulaciones de la economía argentina con espíritu analítico. Mercantilismo colonial, fisiocracia del momento de la independencia, ricardiana incorporación al mercado internacional... en cada momento de nuestra historia hubo un pensamiento que definió actores privilegiados y sendas económicas. En muy pocos lugares como en la Argentina pudo verse cómo la teoría crea realidad. Sólo en la era de la sustitución de importaciones fuimos capaces de pensar una economía política independiente, sobre la base material de la propiedad de los recursos naturales, la apropiación del excedente económico, la jerarquización productiva. Fue el momento del esquema teórico estructuralista, cuyo ascenso, auge y caída fue contemporáneo de nuestro desarrollo como economía y como sociedad.

El costo de la ignorancia

Desde hace treinta años, sobre esa misma economía y sociedad reina el pensamiento único en economía. Tiene una presencia real en las universidades y centros de estudio neoclásicos o neoliberales; tiene una ambición, que es fijar los parámetros de validez del pensamiento económico, lo que está bien y lo que está mal, fieles y herejes, fuera de cualquier influencia política. Al menos explícita. De allí que economía y política consigan el más absoluto y aséptico divorcio, aunque la realidad y la riqueza de los análisis, la propia comprensión de los problemas, se resientan de modo irreversible. Al dejar de lado las contaminaciones del mundo real, entonces la economía deviene en un juego matemático, en donde las modelizaciones formales reemplazan el mundo real. Esa fascinación por los grandes equilibrios y las cifras prolijas a costa de la realidad es una tragedia que Goethe no hubiese imaginado para su Fausto, aunque los resultados sean similares. Sin embargo, el costo de la ignorancia es alto. No sabemos a ciencia cierta si la única verdad es la realidad, pero apartar la política, ignorar los hechos sociales en nombre de una supuesta cientificidad enseñada con esmero a generaciones de incautos estudiantes tiene su precio, que los autores clásicos no estuvieron dispuestos a pagar. Para la Argentina, la caída del régimen neoliberal de acumulación, producción y distribución, en momentos en que tuvieron la suma del poder público, y lo que es acaso peor, la aquiescencia de una gran parte de la sociedad, marca su incapacidad para sobrevivir.

En la actualidad, donde apenas comienza a despuntar un modelo alternativo, en base a la recuperación de la economía, la participación más activa del Estado en defensa del interés nacional, como pueden ser la negociación de la deuda externa o la creación de Enarsa, vemos surgir de nuevo un discurso que parecía olvidado pero que tiene claros objetivos y lógicas coherentes. Es lo que llamamos la economía política de la inseguridad.

Los efectos de la desindustrialización, la precarización laboral y el desempleo en el aumento de la marginalidad y el delito es un asunto reconocido ahora hasta por el Banco Mundial, que sin duda trata de darse un barniz "progre" después de que presidió el desguace del Estado nacional, con el Consenso de Washington como credo indiscutido, e instrumentó políticas catastróficas en educación o salud, por ejemplo, sin hablar de las privatizaciones de los servicios públicos o de las jubilaciones.

Pese a ese público arrepentimiento de los llamados "expertos internacionales", existe hoy en la Argentina un fuerte discurso "securitario" que tergiversa una realidad y plantea un objetivo en términos de poder.

Esencialismo social

La realidad tergiversada es la interpretación de los mismos hechos delictivos. En efecto, los delincuentes son presentados como ejemplo de que los sectores humildes son irrecuperables, cuando no peligrosos. Este discurso, dominante en los medios privados de comunicación, tiene su base en el esencialismo social, expresado en variantes que giran en torno de "esos negros no quieren laburar", o un naturalismo nacional que utiliza variantes sobre "este país es siempre así". Clases populares, clases peligrosas.

El objetivo en términos de poder es acumular suficiente fuerza como para revertir la derrota del fin de la convertibilidad. En efecto, desde la caída de 2001 ya nadie en la Argentina pensaba que las empresas privatizadas vinieron a darnos un buen servicio, los bancos extranjeros son mejores porque tienen el respaldo de sus casas matrices, la economía está supervisada por los técnicos del Fondo Monetario Internacional que son infalibles, un peso igual a un dólar y la prosperidad está a la vuelta de la esquina. Somos del Primer Mundo.

La devaluación en catástrofe y el incumplimiento no deseado fueron, sin embargo, los que permitieron la recuperación de la economía nacional sobre la base de un tipo de cambio sin atraso y con la limitación de los pagos al exterior. Ahora es el momento en que la recuperación precisa de políticas directivas y estratégicas por parte del Estado para convertirse en crecimiento. Aparece más clara que nunca la necesidad de fortalecer el mercado interno a través de la distribución del ingreso y de aumentar salarios; entonces surge este discurso securitario.

Puede ser una casualidad, pero en poco tiempo el establishment ha vuelto a fijar la agenda. En el seminario del Hotel Sheraton, bajo los auspicios de la Fundación Atlas y de la Fundación Neumann, los teóricos del Rodrigazo, el Proceso y el menemismo han vuelto al ruedo. Es la propuesta económica. Allí estaba la plana mayor de los "técnicos" del establishment. Broda habló del colapso argentino que –según él– pasó de la caída libre al rebote técnico. No analizó, por cierto, las verdaderas causas del desastre, en el ejercicio de un arte que debió tener mejor suerte que omitir la responsabilidad concreta que tienen esos gurúes en la aplicación de políticas disolventes.

Aparecen como si no hubiesen tenido nada que ver e ignoran que la recuperación es debida en gran parte al incumplimiento de las exigencias del FMI (entre otras, las relacionadas con la deuda externa). Confunden crecimiento con rebote; y si –contra toda evidencia– fuera así, ¿por qué no lo hicieron ellos cuando gobernaban con Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa? Después, otros dos voceros del establishment, Piekarz y Solanet, reclamaron un mayor pago de la deuda y la reducción del déficit fiscal. ¿No están al tanto de que tenemos superávit primario? Claman por los contratos de las privatizadas, olvidan el Contrato Social, subvirtiendo el orden legal (primero los principios generales del derecho, luego la Constitución, luego las leyes y decretos... y al final los contratos entre particulares), y el respeto de los derechos de propiedad de tenedores de bonos o los dueños del petróleo.

No llegaron ni a la Doctrina Social de la Iglesia, pero vuelven a formular sus propuestas económicas como si viviesen en un presente perpetuo. Recordemos a Friedrich List: "Enmascaran la falta de comprensión de los intereses nacionales y de los efectos de la asociación de las fuerzas nacionales con la confusión de las máximas de la economía privada con las de la economía pública". Olvidaron todo y no aprendieron nada.

La violencia simbólica

Veamos lo social. La muerte de Martín Cisneros, un asesinato político, con fondo de ciertas "protestas" que más parecen provocaciones –como el ingreso de Quebracho al predio del Edificio Libertador, tanto más desplazado como que quien decide el envío de tropas no son las Fuerzas Armadas sino el Congreso de la Nación, pero más parece que el objetivo buscado, y alcanzado, era la provocación más que la protesta– ha permitido que el domingo 27 de junio el establishment presentara en sus diarios, radios y canales de televisión su propuesta social, apenas esbozada en el caso Blumberg.

Sobre la base de la violencia real, producto de las políticas económicas instrumentadas en los decenios anteriores, instalan un alto grado de violencia simbólica. La escenificación es clara, y ni siquiera original: volvemos al concepto de "civilización" contrapuesto a la "barbarie", el orden social frente al desorden activista. Otra vez Goethe: preferir la injusticia al desorden... notable falacia. Pero funciona.

De allí la necesidad de crear un enemigo que represente un peligro asaz creíble como para que surja en los sectores medios la percepción de que su tranquilidad –el modesto *argentinian way of life*– está amenazada. Con la eficaz amalgama de los delitos de derecho común con la expresión política, alcanzan un grado de confusión suficiente como para asimilar grupos piqueteros con parapoliciales, militantes con delincuentes, reclamos con anarquía. Hay cierta fascinación por remedar los setenta –incluso en sectores que no pertenecen al establishment– donde la "subversión apátrida" es reemplazada por los actores sociales surgidos de la marginalidad, resultante de las propias políticas aplicadas.

Nada más alejado de la realidad que esa ucronía, la diferencia de la sociedad argentina de la primera mitad de los años 70, con un elevado grado de politización, no exenta de equívocos, pero con presencia del Estado, pleno empleo y en desarrollo con base industrial. No

existía el modelo neoliberal. Ahora nos encontramos en el otro extremo de tres décadas, con altos grados de pobreza, fuerte desocupación y mucho menor interés en la cosa pública. No hay más Estado, ni servicios públicos, ni jubilaciones. Pagamos nuestra energía como si la importásemos. El modelo neoliberal pasó por la Argentina, tanto en dictadura como en democracia.

Como ya no es posible hablar de transformaciones sociales amenazantes, el peligro lo representan los nuevos actores sociales. Sin analizar los propios límites e incoherencias de estos nuevos actores, son tomados por la teoría política del establishment como el enemigo, la anarquía o el tumor a extirpar. Ya sabemos cómo.

Es preciso para el establishment, representado por las empresas de servicios públicos privatizadas, el sector financiero internacional y local, los propietarios de la deuda externa, los dueños de la energía y en particular del petróleo, contar con un enemigo que sea creíble, si no operativo en cuestiones superficiales pero de alto impacto mediático. Carentes de la legitimidad técnica, su economía no funciona sin legalidad política, sus candidatos perdieron, este establishment cuyo saber es limitado y expeditivo no tiene otro factor de acumulación de poder que no sea amplificar la violencia real y simbólica hasta límites insoportables para la "opinión pública".

En busca del gobierno desbordado

Del mismo modo que la hiperinflación otorgó el margen de maniobra necesario para que sea instalado un régimen económico antinacional, un brote de hiperviolencia orquestado con sagacidad y amplificado con rapidez puede encauzar la política hacia acciones más "amigables" para estos sectores.

Con una propuesta económica definida y una visión social precisa, en términos de aliados, adversarios y enemigos, el proyecto político del establishment tiene dos ejes. El primero es la alianza Ricardo López Murphy-Mauricio Macri. Es una buena noticia, de momento que, una vez no es costumbre, acepten la contienda electoral, la polémica política, confrontar proyectos para avanzar sus ideas. Es la esencia de la democracia sublimar la violencia en la discusión, y "sepa el pueblo votar".

Obliga a los demás sectores, también, a ser un poco más imaginativos en política y efectivos en la gestión. Pero por desgracia, puede no ser el único camino político contemplado. Una cantidad de desorden suficiente para desbordar al Gobierno –o que permita presentar un gobierno desbordado– puede traer, sin caer en interrupciones formales de la institucionalidad, cambios sustanciales en la conducción política del Estado.

Esta economía política de la inseguridad niega los valores constitutivos de la modernidad representada por las revoluciones americana de 1776, francesa de 1789 y argentina de mayo de 1810. Por esencia reaccionaria, en el sentido de desear la vuelta a una situación anterior en el tiempo, adopta formas novedosas. Allí donde observamos con mayor claridad el cambio de paradigma, es que las relaciones de dominación estuvieron marcadas dentro de la modernidad por el establecimiento de un orden social, un régimen político, un funcionamiento económico. En general la nueva relación de fuerzas era sintetizada en una Constitución que marcaba el fin del sistema arbitrario real o metafísico.

Pero en este caso el principal factor de acumulación de poder es la existencia y la amplificación del desorden. Gerenciar el desorden es la cara nueva del establishment, mucho más que establecer un régimen político dictatorial al estilo 1976, que precisa de un golpe cívico-militar; de golpes de mercado usanza 1989-91, para condicionar y someter a un sector político complaciente; entramos en la era del golpe social, con fuerte contenido mediático, cuyo sustento es la acumulación de poder sobre la base del desorden. Por cierto, nada indica que una vez emplazado o desplazado, el poder político imponga el orden, ni siquiera el de los cementerios. En ese escenario más bien nos aproximaremos a la situación de Iraq, donde la caída del régimen anterior no trajo orden a la sociedad iraquí, pero donde los resortes económicos y las ganancias financieras dependen de la potencia ocupante. En nuestro caso, reestablecer por completo la apropiación del excedente por parte del establishment es el objetivo económico, y gerenciar por control remoto al resto de la sociedad sumida en el desorden y en la confusión es el modo de regulación social.

Las teorías crean realidad. Esas teorías estructuran paradigmas económicos y modelos sociales: tienen la forma de proyectos nacionales. Conocemos por demás cuáles son las pasiones y los intereses del establishment. Sabemos cuán lejos pueden llegar para cumplirlos: la historia pasada y reciente de la Argentina está llena de ejemplos. El presente escrito no es más que una reflexión sobre los últimos acontecimientos, a la luz de "la economía política de la inseguridad".

Como en la historia no hay marcado ningún destino manifiesto para la Argentina, otro que el que queramos –y podamos–, establecer una economía política del crecimiento, que precisará, qué duda cabe, suficiente poder político para resolver los problemas de base, que son los 18 millones de pobres, tres millones de desocupados, la extranjerización de la estructura económica, la alienación del petróleo y de la energía, la negociación (o negación) de la deuda. Este esquema tiene el financiamiento necesario y puede contar con mayor amplitud gracias a un nuevo sistema fiscal, a la recuperación de las jubilaciones y a la apropiación de la renta de recursos naturales. Hablamos de nuevos actores económicos y renovados agentes financieros. De un proyecto económico, social y político en la gran tradición del Plan Trienal de 1973.

No inventamos nada en la teoría económica, pero podemos crear todo en la práctica política: "La unidad nacional es la condición esencial de una prosperidad duradera" –escribía Friedrich List en 1840–, "sólo allí donde el interés privado se ha subordinado al interés público y donde una serie de generaciones ha perseguido uno y el mismo fin, los pueblos han llegado a un desarrollo armónico de sus fuerzas productivas". La principal inseguridad que corremos en la actualidad es quedarnos sin Nación ■

SEGUROS ESTAREMOS CUANDO NO SE EXCLUYA

Si la sociedad expulsa groseramente a mujeres, hombres y niños sin ningún futuro, le está abriendo las puertas a la inevitable inseguridad.

POR ALFREDO CARAZO
acarazo@sitioima.com.ar

Si se globaliza la injusticia, se globaliza la violencia. Porque la injusticia social es violencia en sí misma, como generadora de pobreza, marginalidad y exclusión social. No es la pobreza la que engendra violencia. La violencia es concebida por la injusticia. Si la sociedad expulsa groseramente a mujeres, hombres y niños sin ningún futuro, le está abriendo las puertas a la inevitable inseguridad. No se pueden tener los beneficios y los perjuicios de la virtud. Se podrá recurrir a la represión, pero la respuesta terminará siendo más violencia.

Quizás sea bueno recordar que hasta no hace muchos años, el debate transitaba las aguas más o menos calmas del conflicto social con la mirada puesta en la humanización del capital. Se postulaba "darle un rostro humano", como para no "combatirlo". Hoy los riesgos derivados de la globalización deshumanizante son tantos que tornan escasas sus bondades.

Intentamos salir de los trazos gruesos de la dependencia y de la pérdida de identidad personal y colectiva, pero no lo hemos logrado aún. Porque no es honesto impulsar mediciones optimistas, ni tampoco aquellas pesimistas que exceden los marcos racionales de la realidad. Y porque a pesar de las contingencias que nos impactan, se torna casi imprescindible sacudirse el lastre del pensamiento único y no renunciar a la utopía. Aunque sabemos que son muchos los problemas que interactúan entre sí y que alimentan los altos niveles de conflictividad social, no sólo en nuestro país, sino también en el resto de la región. Esa América latina morena, de la que no podríamos despegarnos aunque quisiéramos, a riesgo de seguir dominados.

Sólo un dato entre muchos debería alertar un análisis apartado de cualquier repentismo irresponsable: atendiendo a la perversa ecuación pobreza-desigualdad mundial, los países latinoamericanos le asignan menores recursos públicos a la salud que todas las regiones del planeta. América latina no es la región más pobre del mundo, pero sí la más injusta, por lo que no es casual que muchos de nuestros países ocupen los lugares más prominentes en la escala de la violencia. Por caso México, Colombia, Brasil y muchos otros países de la región presentan un escenario calcado de un fenómeno que superó hasta el hartazgo los límites de la protesta social de antaño.

Toda visión sesgada lanzada desde los medios de comunicación terminará siendo funcional a gruesos errores, porque rehúye responsabilidades colectivas y, sobre todo, desecha el deber-ser que involucra al ser humano y al pueblo todo. Mostrar y demostrar obligatoriamente la inseguridad ciudadana –muchas veces exageradamente– no da derecho ni obliga a su comprensión, aunque es legítimo admitir distintas interpretaciones. Ni todo lo bueno ni todo lo malo está en los medios de comunicación, por lo que cuando se insiste en el estereotipo de la autodenigración, la visión termina siendo parcial y a tituló de rehuir la responsabilidad propia se aborda la inseguridad desde la acusación. Hasta los permanentes alegatos a consolidar la democracia se desdibujan cuando se hurga en los pliegues desestabilizadores. Como señala bien Ernesto Sabato, "si prevaleciese la desesperación, todos nos dejaríamos morir o nos mataríamos, y eso no es de ninguna manera lo que sucede".

Es aquello de "esto pasa en este país", mirado desde la atalaya fiscalista. No se trata de justificar la violencia. Ninguna violencia se justifica en sí misma, venga de donde venga, pero tampoco se puede apilar muestras estadísticamente, para instalar una sensación de parálisis ciudadana que alimenta la paranoia de la inestabilidad política.

Decantar el objetivo ideológico que conmueve la matriz de opinión, individual y colectiva es todo un desafío para delinear con cierta claridad el escenario actual sin caer en especulaciones efectistas. Sobre todo para evitar acudir al expediente de colocar todo y a todos en la misma bolsa y para no caer en la mentira periodística. En todo caso, desde hace mucho se conoce que sólo el uno por ciento de la sociedad, el más poderoso, controla la comunicación social y orienta el mensaje comunicacional.

Bien es cierto que asegurar la seguridad –valga la redundancia– es función esencial del Estado, pero también es cierto que no alcanza el tiempo para agigantar la conciencia de la causalidad de la violencia que subyace en la injusticia social, una dimensión perversa del modelo neoliberal. Sin trabajo hay miseria y en la miseria todo se desdibuja, no hay horizonte. A esta violencia estructural que golpea diariamente con perfiles bien definidos, nada le pondrá coto desde la simple represión. Se irá atenuando si la controvertida cuestión social –a la que tanto se alude y se elude– adquiere una dimensión que revierta la dinámica de la concentración de ingresos, de riqueza, de poder económico cada vez en menos manos. Sólo así comenzará a hablarse de inclusión social.

Conocer dónde estamos parados, poder constatar las analogías de situaciones de violencia según sus causas, evitar las simplificaciones que adocenan debiera orientar la ética de los medios de comunicación, que en no pocos casos –sobre todo los televisivos– terminan reblandeciendo la facultad cognitiva del hombre, a través de una cultura audiovisual que idiotiza y debilita la capacidad crítica y de discernimiento ■

EMBOTELLAMIENTO EN EL TÚNEL

Años del túnel de la convertibilidad llevaron a la constitución de grupos de expresión política diferente con objetivos disímiles y en muchos casos puntuales

POR MIGUEL ZANABRIA
mzanabria@sitioima.com.ar

Me contaron que el genial economista contemporáneo Albert O. Hirchmann, que nunca ganará un Premio Nobel debido a sus ideas, decía que si alguien se encontraba con un embotellamiento en un túnel seguramente estaría malhumorado y que dicho malhumor se aliviaría si de repente ve que el tránsito en uno de los andariveles –que no es el suyo– comienza a marchar. Ese alivio se desvanecería rápidamente y su malhumor superaría al inicial si pasado un momento ve que él sigue atorado y el otro andarivel sigue marchando.

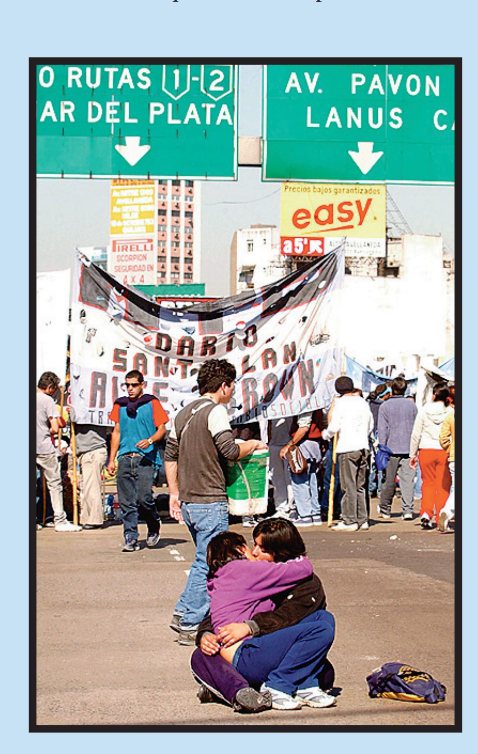
Ese ejemplo nos sirve para ilustrar la situación argentina. De que estamos en un túnel y atascados no hay dudas desde hace un par de años. Tampoco nadie puede ignorar que el "tránsito" comenzó a marchar, ¿o no crece la economía a tasas asiáticas? Sin embargo, la actualidad argentina está signada por el cruce de reclamos diversos expresados por fuera del sistema de la democracia liberal. Será necesario dar rienda suelta a la imaginación y complicar el ejemplo de Hirchmann.

No es difícil imaginar cómo los pasajeros de los vehículos viejos y descascarados atascados junto con algún carrito cartonero –que nunca falta– ven que el carril de los 4x4 y autos importados de ilegales vidrios polarizados salen del túnel a una velocidad inusitada. ¿O no es cierto que en 2003 el 10 por ciento más rico de la población es 30 veces más rico que el 10 por ciento más pobre, mientras que en 1974 lo era "sólo" 14 veces más rico?

No es difícil de imaginar, sobre todo si uno viaja de vez en cuando en taxi, que los del carril de los vehículos desvencijados vean en el carro del cartonero la causa de su atascamiento, tal vez podríamos escuchar: ¿Cómo es que el Gobierno deja transitar a estos carros mugrosos? Sin embargo, ¿qué puede hacer el cartonero?, nada, él está tan atascado como todos los que ocupan su carril. De repente, el cartonero ve desde la altura de su carro que llega la policía de tránsito, pero en vez de detener por un momento a la columna rica y hacer el tránsito equitativo, solo les pide una colaboración para la cooperadora de no sé dónde para dejarlos pasar. Obviamente la colaboración es voluntaria, pero justo coincide que aquellos que "no tienen monedas" tardan más en que les den paso. Ante tal situación la columna de vehículos cachuzos empieza a usar las bocinas. Dentro del túnel el ruido se hace insoportable. Aunque los cristales de los vehículos de la columna veloz funcionan a la perfección, no pueden impedir quedar aturdidos en el paso del túnel, ahí recuerdan que el uso de las bocinas está prohibido y usando sus celulares envían fotos a la "Unión Internacional de Regulación del Tránsito" con sede en Washington. La UNRT emite un enérgico comunicado en el que dice que el Gobierno no logra regular el tránsito, que el uso de las bocinas afecta el oído de las personas que transitan por el túnel y que ese clima de confusión influirá negativamente sobre las inversiones en nuestro país, aunque queda muda sobre el origen del embotellamiento y de la desigualdad de la circulación. Mientras tanto aquellos privilegiados que salieron rápidamente del túnel se encontraron con que no lograban conseguir cargar combustible, ya que los camiones cisterna habían quedado atascados en... el túnel.

El ejemplo, aunque descabellado, pretende ayudarnos a entender el momento actual de la Argentina. Años del túnel de la convertibilidad llevaron a la constitución de grupos de expresión política diferente con objetivos disímiles y en muchos casos puntuales. Esto dificulta enormemente la posibilidad de "ordenar el tránsito", dada la variedad de los reclamos y la falta de una idea de conjunto de cómo hacer para salir del túnel y avanzar armoniosamente por el camino del desarrollo económico y social. Por ejemplo, tal vez sería mejor dar prioridad a quienes están en el carril "cachuzo" delante de los camiones cisterna; que una vez que estos hayan salido, la policía caminera deje pasar uno de cada carril sin pedir ninguna colaboración porque el Estado se comprometió a financiar la cooperadora –luego de chequear su existencia y la utilidad social de sus fines– con el fondo general de las autopistas; que el cartonero pueda pasar su carga y su carro a un camión estatal hasta que pueda comprarse un auto cachuzo producto de un empleo –o incluso de un subsidio sin contraprestación– y no tenga más necesidad de usar su carro.

La conformación de grupos con objetivos diferentes y por fuera de las estructuras partidarias tradicionales es una problemática analizada por Claus Offe. Este autor ve en el éxito del Estado providencia el desentendimiento de la contradicción capital-trabajo, el origen de la división derecha-izquierda y de la constitución de nuevos movimientos abiertos –en contraposición a la pertenencia o no a un partido político– alrededor de temas específicos. En otras palabras, dado que el Estado permitió la sublimación del conflicto original del capitalismo, al garantizar una representación institucional sobre los planos políticos y económicos como a la seguridad y a la protección social, el interés político se condujo hacia temas puntuales, por ejemplo la ecología, el cuerpo, las tradiciones culturales, entre otros.



En nuestro país uno estaría tentado a realizar paralelismos con lo acontecido en los países centrales, pero aquí esos nuevos movimientos sociales son originados no por el éxito sino por el fracaso de la acción del Estado liberal-represor. De esta forma no es de extrañar que el primer gran movimiento de este tipo fuera el de los derechos humanos desde finales de la dictadura que implementara el terrorismo de Estado. El involucramiento de las fuerzas de seguridad en esa política de terror y la revisión acotada de esa época por las leyes de punto final y de obediencia debida dieron razón al eslogan de los '80, "los asesinos impunes de hoy serán los criminales de mañana", aunque en realidad podría haber sido "los asesinos impunes de hoy serán el ejemplo para los criminales de mañana".

Los argentinos vimos desfilar la romántica frase de "con la democracia se come y se educa", seguida por la visión de que el Estado que garantizaba seguridades de diferentes tipos era cosa del pasado y que su minimización daría lugar a su superación gracias a la acción de los actores individuales.

No pasaría mucho tiempo hasta encontrarnos atrapados en el túnel, pero ahora las formas de expresión políticas ya no son iguales que en los años dorados que finalizaron a mitad de los '70. Detrás de objetivos puntuales, "esos movimientos son incapaces de negociar porque no tienen nada que ofrecer", como dice Offe.

Es el Estado el que debe organizar la salida del túnel, lo que de cierta forma ya comenzó con la reorganización de la Justicia y la generación de una especie de nuevo "gestalt" para los organismos de seguridad bajo la clara condena al terrorismo de Estado y las purgas recurrentes de los elementos criminalizados. Sin embargo, esto no alcanza y se debe organizar la salida del túnel haciendo marchar el consumo de aquellos que menos tienen, ya que si bien el consumo reprimido de la elite permite explicar gran parte del crecimiento reciente, éste ya se está agotando y es necesario que el consumo popular tome el relevo. Será necesario, además, asegurar "el combustible", o lo que es lo mismo, la inversión, que fue el otro gran factor explicativo de la recuperación, pero ya no dejada a la espontaneidad de los empresarios sino guiada mediante una política industrial, hasta ahora inexistente, que guíe el esfuerzo hacia un modelo integrador y no al excluyente agroexportador de velocidades diferentes. Así, cuando todos los carriles circulen y se sepa cuál es el camino a seguir, la pluralidad de reclamos irá convergiendo hacia situaciones en las que los grupos podrán negociar con relación a un proyecto de país ■

Las comparaciones siempre resultan odiosas, aunque necesarias en no pocas oportunidades. La Argentina no está al tope de la inseguridad ni mucho menos. Tampoco es el edén, como para no caer en el maniqueísmo que simplifica la realidad. Lo que sí parece signar al continente es la injusticia en la distribución de los bienes, que violenta vidas. Recientemente en Nueva York, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señalaba que "no hay arma de destrucción masiva más potente que el hambre; no mata soldados, mata a niños, a mujeres, a jóvenes y es nuestra responsabilidad mediante acciones cambiar un poco la historia de la humanidad".

Hace pocas horas, miles y miles de mexicanos marcharon por el Distrito Federal de México, reclamándole al gobierno del presidente Vicente Fox medidas efectivas contra la violencia. Hay quienes quisieron ver en esta manifestación convocada por organizaciones empresariales, ex militantes de partidos políticos y otras estructuras que se fueron sumando con el correr de los días, un calco de similares expresiones en la Argentina. Pero de acuerdo con mediciones internacionales, México ocupa el segundo lugar en el mundo en cantidad de secuestros anuales, tan sólo detrás de Colombia, aunque éste es un país sumergido en un escenario de guerrilla y narcotráfico. Se calcula que se producen 21 delitos por hora, la mayoría de los cuales quedan impunes.

También el escenario está fuertemente influenciado por la política, habida cuenta de que el mandato de Vicente Fox se está agotando y asoma con fuerza la figura de Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien se empeña exageradamente en hablar de un complot de la derecha contra sus aspiraciones presidenciales. Lo cierto es que en el último decenio en México se cometieron 15.000 secuestros, pero no todos fueron denunciados porque se sospecha de la complicidad de la policía y de la Justicia. En lo que va del año, por lo menos 50 secuestrados fueron asesinados y las víctimas no son solamente personas adineradas.

Las estadísticas indican que por lo menos 10 de cada 25 hogares de la capital mexicana fueron víctimas de la inseguridad. Allá como acá se intentarán nuevas leyes para conjurar la violencia y allá como acá, la inseguridad y la desconfianza en las instituciones condujeron al florecimiento de la industria de la vigilancia privada, sobre la que también recaen ahora las sospechas. Una sola de esas em-

MIREMOS EL TODO

Y NO SÓLO LA SUPERFICIE

Antes que la violencia que nos remite a la inseguridad, el denominador común en toda América latina es la violencia de la miseria, la marginalidad y la exclusión social, que excede algunas buenas noticias de la macroeconomía.



presas piensa facturar este año siete millones de dólares, aumentando considerablemente los 250.000 dólares del año pasado. Aunque investigaciones periodísticas dan cuenta de que la industria de la protección les cuesta a los empresarios algo así como 1000 millones de dólares.

Ahora, otras cifras debieran importar también. Antes de que fuera Chile, para el gobierno de Estados Unidos el modelo a seguir era México. Es verdad que desde entonces hubo un fuerte incremento de las exportaciones, sobre todo de productos manufacturados y de alta tecnología dirigidos a Estados Unidos, pero según el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, estas constataciones "no expresan la difícil realidad de 67,8 millones de mexicanos, equivalente al 73,3 por ciento de los hogares, que viven en la pobreza o pobreza extrema".

Y se agrega que "el país no logra encontrar una ruta que conduzca al crecimiento sostenido, la generación de empleos, el abatimiento de la pobreza, es decir, al incremento del bienestar de la población. Al contrario, la evidencia apunta hacia un deterioro en los niveles de vida de los mexicanos".

Un poco más acá, en Chile, datos oficiales indican que uno de cada tres ciudadanos fue víctima de algún delito en los últimos doce meses, ya sea robo de autos, violación o abuso sexual, lesiones y robo con fuerza en su vivienda. Para el Ministerio del Interior, las cifras de victimización se sitúan en los parámetros europeos. Y se da un dato que echa por tierra algunas estimaciones que nos han llegado en los últimos tiempos. En el Reino Unido, el 34,4 por ciento de los consultados en una encuesta dijo haber sido víctima de un delito, hubo un 31,1 por ciento en Dinamarca y un 30 por ciento en Escocia.

Desde 1997, en Chile se registraron los niveles más altos de delincuencia, sobre todo los robos con violencia o los asaltos. El modelo económico chileno también es mostrado como ejemplo por Estados Unidos, país con el que acaba de firmar un Tratado de Libre Comercio, que no alcanza para ocultar la pobreza y la exclusión social.

El año pasado, un Foro sobre Seguridad Ciudadana, convocado por el Ministerio del Interior, concluyó que Chile no tiene actualmente la institucionalidad requerida para abordar con éxito el problema, pero además añade que "en una visión macro, se señala que América latina se ha convertido en el continente más violento, con tasas de homicidio que triplican el promedio mundial".

En Panamá –como ocurre desde hace décadas en Venezuela–, las viviendas aparecen rodeadas de muros, verjas y guardias particulares y también se acusa a las autoridades de la complicidad de policías y jueces. Según un estudio de la Universidad de Panamá, el hurto y el robo con arma de fuego son los delitos con mayor reincidencia y la ola de criminalidad es determinada por la tasa poblacional, que evidencia un aumento conforme al crecimiento de los problemas sociales y la violencia en las calles. La Organización Panamericana de la Salud ya advirtió que en Centroamérica crece la violencia, con "una alta disponibilidad de armas", sobre todo en manos de las "maras" o pandillas juveniles, con extrema actividad en El Salvador, Guatemala y Honduras. En Costa Rica, que otrora fuera un paraíso, en sólo seis meses del año pasado se registraron 4518 asaltos, 176 asesinatos, 3948 saqueos a viviendas, la mayoría con violencia, además de un incremento en las violaciones a menores de edad.

No hace mucho, las autoridades salvadoreñas señalaban que la fuerza pública ha sido rebasada, porque "hay más mareros que policías y efectivos militares juntos, son ya entonces una amenaza para todos los salvadoreños; asesinan a un promedio de 100 personas por mes y a ese ritmo, habrá más salvadoreños asesinados que los que dejaron los terremotos".

En Perú, el alto índice de desempleo es señalado por la mayoría de los peruanos como la causa principal de la escalada de violencia ciudadana. Apenas un 12 por ciento de los limeños mayores de 18 años se siente seguro cuando sale a la calle. Y en Paraguay, el presidente Nicanor Duarte Frutos encontró un país en el que "la gente está con miedo, los obreros que cobran sus pequeños salarios tienen miedo de subir a los colectivos, los empresarios tienen miedo a invertir, hay miedo para salir o volver a la casa". Contando sólo los delitos denunciados, se calcula en más de 8000 los cometidos el año pasado. En el Norte, más concretamente en Washington, la Mara Salvatrucha, integrada por jóvenes salvadoreños que fueron desplazados de su país por la miseria y la falta de oportunidades, ha tomado una vigencia callejera poco menos que incontenible, sobre todo por los asesinatos, la mayoría de los cuales tiene como víctimas a connacionales.

La nómina podría seguir sin interrumpirse. Pero en todos los casos hay un denominador común, que excede las cifras de la macroeconomía con que se nos bombardea sin piedad: la miseria. Porque más del 50 por ciento de los latinoamericanos se sienten excluidos, marginados de la sociedad a pesar del esfuerzo de vivir dignamente que resulta literalmente confiscado por la acumulación y concentración económica en pocas manos. Antes que la violencia que nos remite a la inseguridad, el denominador común en toda América latina es la violencia de la miseria, la marginalidad y la exclusión social, que exceden algunas buenas noticias de la macroeconomía ■

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

"Para él son los calabozos, para él las duras prisiones, en su boca no hay razones, aunque la razón le sobre; que son campanas de palo, las razones de los pobres"
José Hernández, *Martín Fierro*

La percepción que tiene el ciudadano sobre el tema de la inseguridad se visualiza en el conjunto de actitudes, creencias y sentimientos, aunque la misma no siempre coincide con la realidad. La inmensa mayoría sostiene que los delitos son cometidos por personas que viven en una villa de emergencia, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Capital Federal. Sin embargo, un relevamiento estadístico (1998) realizado sobre las causas judiciales tramitadas por ante los Juzgados Criminales de competencia federal de la Ciudad de Buenos Aires, en el delito de tráfico y tenencia de estupefacientes, parece indicar lo contrario, ya que solamente viven en una villa o casa tomada el 6,7 por ciento, en tanto viven en un departamento el 30,7 por ciento de los imputados, en casa el 22,7 por ciento, en hotel o pensión el 3,2 por ciento, en un inquilinato el 1,5 por ciento, en barrio obrero el 1,2 por ciento. Resulta revelador que en el 87 por ciento de las causas analizadas se secuestraron menos de cinco gramos de droga, registrándose sólo 26 casos que superan los cinco gramos de estupefacientes.

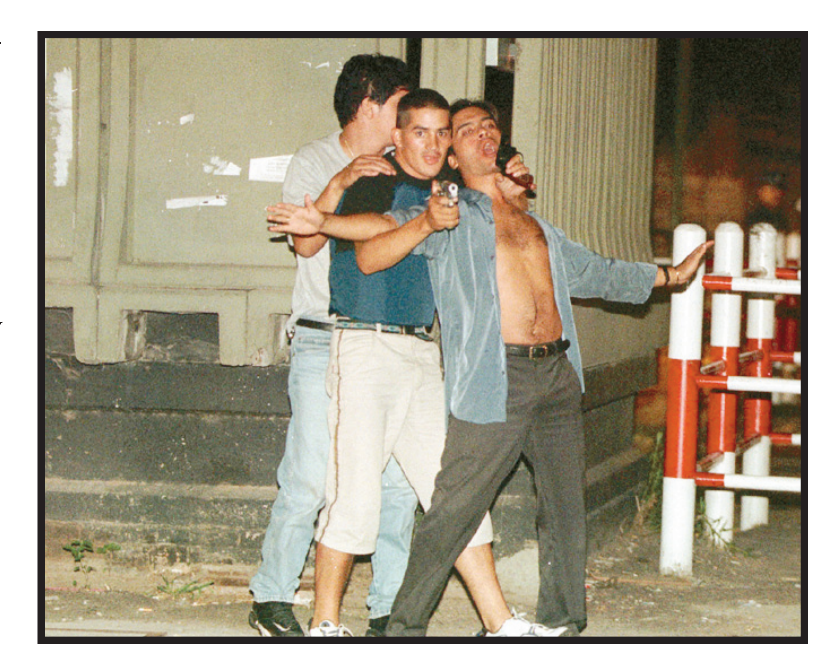
El sistema penal siempre ha acudido a imágenes de hombres ideales para producir sus propios mitos encausadores. Así la dogmática jurídica apela al hombre prudente para decidir si existe infracción al deber objetivo de cuidado y con ello un delito culposo, o para definir si el error ha sido evitable. En tanto el mediático pensamiento por imágenes simplifica la discusión, condenando sin juicio previo y sin pruebas, exacerbando el sentimiento colectivo a la vindicta pública y exigiendo prontos chivos expiatorios, mientras el discurso político oscila entre planteos liberales maximalistas y autoritarios represores.

Un plan de seguridad se debe fundar en los principios de ética y ejemplaridad, así como en la protección de los derechos humanos de cada habitante y del conjunto de la sociedad, poniendo el acento en la ética y la ejemplaridad, ya que sin una ética conceptual que nos integre a la nacionalidad mal puede reclamarse una ética individual que carezca de la ejemplaridad que el poder económico, político y social debe acreditar.

Lo que está en discusión es el modelo de sociedad a que aspiramos, de allí que el eje central del debate es esencialmente filosófico. Juan Bautista Alberdi, en su *Fragmento Preliminar de Derecho* allá por 1837 nos legaba: "Saber, pues, leyes, no es saber derecho" ... "Encontré que era nada menos que la ley moral del desarrollo armónico de los seres sociales" ... De suerte que filosofar, en materia de leyes, es buscar el origen de las leyes... "La razón: ley de leyes, ley suprema, divina, es traducida por todos los códigos del mundo"... "Una Nación no es una Nación sino por la conciencia profunda y reflexiva de los elementos que la constituyen". Agregando que "y como la filosofía es la negación de toda autoridad que da la razón, la filosofía es madre de toda emancipación, de toda libertad, de todo progreso social. Es preciso, pues, conquistar una filosofía para llegar a una nacionalidad".

Alberdi remarca algo que aún parece no incorporamos: "Gobernémonos, pensemos, escribamos y procedamos en todo, no a imitación de pueblo alguno de la tierra, sea cual fuere su rango, sino exclusivamente como le exige la combinación de las leyes generales del espíritu humano, con las individualidades de nuestra condición nacional". Para ahondar la problemática de la seguridad ciudadana no basta parcializar el enfoque desde una exclusiva óptica académica, desde la imagen mediática, o simplemente desde la sensación de inseguridad. El equilibrio entre la ciencia y la realidad cotidiana, entre la experiencia ciudadana y la policial, entre la conducción política y el consenso participativo es el imperativo que debe primar.

Frente a la manipulación comunicacional resulta útil apelar a lo que Sigmund Freud sostenía en su libro *Psicología de las Masas*, cuando afirmaba: "La multitud es extraordinariamente influenciable y crédula, carece de sentido crítico y lo inverosímil no existe para ella. Piensa en imágenes que se enlazan unas a otras asociativamente, como en aquellos estados en los que el individuo da libre curso a su imaginación sin que ninguna instancia racional intervenga para juzgar hasta qué punto se adaptan a la realidad sus fantasías... Las multitudes llegan rápidamente a lo extremo. La sospecha enunciada se transforma ipso facto en indiscutible evidencia.... Respeta la fuerza y no ve en la bondad sino una especie de debilidad, que le impresiona muy poco. Lo que la multitud exige de sus héroes es la fuerza e incluso la violencia. Quiere ser dominada, subyugada y temer a su amo ... Las multitudes abrigan, en el fondo, irreductibles instintos conservadores, y como todos los primitivos, un respeto fetichista a las tradiciones y un horror inconsciente a las novedades susceptibles de modificar sus condiciones de existencia".



Recuperar una visión realista y distante de las imágenes que cotidianamente simplifican los hechos y las conductas debidas es un pilar para reconstruir la mediación social y política insustituible ante la envergadura de la problemática a enfocar.

En una sociedad que sólo ve la virtud en lo propio o en lo que a su sector le conviene, la tarea política y de la política con mayúsculas es fundamentalmente docente. Justamente para hacer docencia hay que aprender de los que reclaman con razón y sin ella, de los que saben y de los que simplifican, aun de los que piden lo injusto, para a través de las conductas y de las normas trasmitir a los ciudadanos una tranquilidad mayor que la simple seguridad presente: la ejemplaridad que el país necesita para las generaciones venideras ■

PIQUETEROS: PROBLEMA O SOLUCIÓN

La reconstrucción que tenemos por delante es una tarea que debe ser compartida por el conjunto de los argentinos y asumida como una expresión de responsabilidad.

POR VÍCTOR SANTA MARÍA
vsantamaria@sitioima.com.ar

La inseguridad en la que se encuentra sumergida nuestra sociedad no es un fenómeno que surgió de la nada, de un día para otro. Es el resultado de un programa sistemático de destrucción nacional que se inició con la instalación de la última dictadura, implementando un modelo de no-país que colapsó en cuanto a su credibilidad con los acontecimientos de diciembre de 2001.

Al endeudamiento del Estado se lo complementó con la quiebra del aparato productivo, fundando lo que se conoció como la "patria financiera". La globalización compulsiva que nos ató a las recetas de los organismos internacionales de crédito fue horadando el mercado laboral con una flexibilización que no hizo más que precarizar el empleo, al tiempo que se lo disciplinaba con un creciente ejército de reserva de desocupados.

El desmantelamiento del Estado hizo que paulatinamente se fuera desentendiendo de la atención directa de las necesidades de la población, que se resignaban a manos del mercado al que se había entronizado como el "asignador más eficiente de los recursos disponibles". De esta manera, los recursos se asignaron según un criterio en el que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, en un movimiento complementario que genera a la vez concentración económica y exclusión social.

Así, a la inseguridad en el trabajo se le sumó la inseguridad por la subsistencia de una gran parte de la población que se veía descender inexorablemente cada vez más por debajo de la línea de pobreza, en un cuadro donde la mayoría de los niños son pobres y la mayoría de los pobres son niños.

Hoy, los argentinos nos encontramos en una nueva etapa, en la cual el fraude del modelo de no-país quedó al descubierto y se avanzó en el sentido de remover adherencias que quedaban como testimonio del pasado. Venimos del infierno y resta mucho todavía para recuperarnos. Es mucho el daño que se hizo a la Argentina real, es decir a las personas que son el país. Pudo haber sido mucho peor y más todavía la inseguridad que sufrimos como residuo de ese pasado que no nos quiere permitir la reconstrucción que precisa el país.

Estas consecuencias de la destrucción que hoy padecemos podrían ser mucho peores si no fuera por la iniciativa y la voluntad de organizarse de una parte significativa de la población, que viene dando muestras de ejercicio de una ciudadanía plena y que expresa una concepción militante de la democracia. Una democracia que se construye en los hechos y encauza los reclamos sociales a través de organizaciones que constituyeron una verdadera malla de contención, generando incluso alternativas creativas en cada momento, frente a las fuerzas que pretendieron disolvernos en el supuesto orden global del pensamiento único para el cual la vida humana es irrelevante si no es útil al mercado.

La organización social que trabaja por el bien común es una de las manifestaciones más contundentes de la solidaridad y el espíritu comunitario que aún sobrevive en nuestra sociedad, más allá de los cantos de sirenas del individualismo indiferente que se nos quiso vender a lo largo de un cuarto de siglo.

Dentro de las diversas experiencias que vieron la luz de la mano de la iniciativa social, cabe destacar el especial aporte que significó el surgimiento del movimiento piquetero, en momentos en que el desempleo comenzaba a evidenciar su carácter endémico. Compuesto fundamentalmente por trabajadores desocupados, este movimiento se fue generando en torno de la capacidad de autoorganización que es producto de las mejores tradiciones de los trabajadores de nuestro país.

De esta manera, uno de los sectores más castigados de la vida nacional constituyó un cauce por el que canalizar sus reclamos e incorporar su voz a la discusión de cuestiones que hacen al bienestar del conjunto. Por eso constituye un verdadero ejemplo de iniciativa social de integración, desde el momento en que hacen posible la participación política de quienes el modelo había condenado a la exclusión y la marginalidad. Una contribución insoslayable que se les debe reconocer es justamente que con su presencia en las calles ayudaron a una toma de conciencia colectiva acerca de la naturaleza destructiva de ese modelo implantado en el país, convirtiéndose en la evidencia viviente de las consecuencias que no tardarían en alcanzar a la inmensa mayoría de la población.

Muchos de quienes sostenían las fantasías y engaños con que se pretendía maquillar la destrucción nacional hoy se rasgan las vestiduras frente a las incomodidades que surgen de la protesta social y a la decisión del Estado de no contestar con represión. Los argentinos ya tomamos debida nota de la experiencia del pasado reciente y tenemos claro que la violencia ejercida por parte del Estado nunca aporta soluciones a nuestros problemas, sino que más bien agrava las consecuencias y rompe los puentes de diálogo fundamentales para avanzar en el camino de la cohesión y la estabilidad que tanto necesitamos. Quienes cargan las tintas sobre la reacción de las víctimas, lo que están haciendo en realidad es buscar chivos expiatorios para diluir su propia responsabilidad.

No es posible desconocer la importancia de estas organizaciones sociales cuya existencia misma aporta racionalidad y contención a reclamos justos, que de otra manera, ante la falta de soluciones inmediatas, seguramente hubieran desbordado alimentando el caos y la anarquía. Un sector importante del movimiento piquetero ha comprendido la necesidad de profundizar la acción constructiva sin por ello dejar en un segundo plano las reivindicaciones que les son propias. Cabe esperar que esta actitud se haga extensiva al conjunto del movimiento así como del cuerpo social, para que la expresión de los reclamos y aun de las diferencias pueda realizarse en paz y en forma responsable.

La reconstrucción que tenemos por delante es una tarea que deber ser compartida por el conjunto de los argentinos y asumida como una expresión de responsabilidad tanto por parte del Estado, como de la sociedad civil y el sector privado. Hoy contamos con una conducción del Estado nacional que está decidida a ponerse de pie junto a la sociedad con la que comparte valores y esperanzas en un futuro mejor. Un Estado que asume el compromiso de trabajar por el bien común y reconstruir los lazos que hacen a un país integrado. Un Estado que vuelve a estar al servicio de sus representados y ejerce el liderazgo en la definición de un nuevo Proyecto Nacional que, recuperando lo mejor de toda una historia por la autodeterminación y que, atacando las causas de la inseguridad del presente a través de una reforma estructural de nuestras instituciones, haga posible el país en serio que deseamos para nosotros y para nuestros hijos ■